

Pedimento del O. Procurador General de la Nacion.

El fiscal, en calidad de Procurador general de la Nacion, dice: que la presente causa se inició en el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra Agustin Baltazar, por el delito de circulacion de moneda falsa. En 1ª instancia, y por auto de 19 de Diciembre del año anterior, se falló: Que es de absolverse y se absuelve á Agustin Baltazar, del cargo de circulacion de moneda falsa.

Ese fallo fué á su vez confirmado por el Tribunal de Circuito de Querétaro en 23 de Enero próximo anterior, declarando; se absuelve á Agustin Baltazar del delito de circulacion de un peso falso, de que se le hizo cargo.

Causando ejecutoria el fallo de segunda instancia, y no encontrando el que habla mérito para exigir responsabilidad á los jueces inferiores, el Procurador interino es de opinion se de por revisado este proceso.

México, Febrero 7 de 1874.—*Altamirano.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 20 de 1874.—Por revisado, y no apareciendo mérito para exigir la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—S. Guzman.—M. Zavala.—Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Marzo 24 de 1874.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial segundo.

AMPARO.

Promovido en el Juzgado de Distrito de Coahuila por el O. Evaristo Madero, contra los OO. General Andrés S. Viesca y Coronel Emiliano Laing, por violacion de los artículos 16 y 27 constitucionales.

PEDIMENTO DEL O. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que segun manifestó en su anterior pedimento, tres son los hechos en que ha fundado el C. Evaristo Madero su solicitud de amparo. El allanamiento de su domicilio en la Hacienda del Rosario de su propiedad, á causa de haberse introducido el dia 15 de Noviembre próximo pasado una partida de soldados por Orden del C. Coronel Emiliano Laing, llevándose de leva á todos los sirvientes é industriales de la Hacienda: la ocupacion de varios caballos de su propiedad sin su consentimiento y sin la previa indemnizacion: y los préstamos de dinero que le han exigido, sin que hasta hoy haya presentado los comprobantes correspondientes.

Sobre este último hecho que la parte no ha cuidado de precisar fijando las cantidades, y demostrando la violacion respectiva, los ejecutores informan, que únicamente se le han exigido las contribuciones que tiene que pagar al Estado, segun consta en los recibos que se le otorgaron.

Las facultades que la autoridad responsable haya tenido para decretar esta medida administrativa, no estan sugetas á la calificacion del Juzgado. No es posible calificar la justicia de aquella disposicion sin intervenir en la soberanía de una entidad libre é independiente en su régimen interior, ni es de hacerse tal calificacion en el presente juicio, cuyos procedimientos deben limitarse á proteger al individuo en el caso especial que denuncia como atentatorio á sus garantías, sino hacer declaraciones genera-

les sobre los actos ó providencias que lo motivan (artículo 132 constitucional).

El interesado no ha desvanecido los actos de la autoridad, ni ha hecho consistir la violación de que se queja en habérselo exigido anticipadamente el cumplimiento de la obligación que tiene de contribuir, como todo ciudadano, para los gastos públicos.

La solicitud de amparo no hace mención de esta circunstancia, ni la ha denunciado como atentatoria á las garantías individuales; y puesto que hay necesidad de instancia de parte para proceder (artículo citado de la Constitución,) el Promotor obraría oficiosamente si considerase bastante para conceder el amparo, aquella providencia de exigir anticipadamente las contribuciones locales, no habiendo sido reclamada por la parte agraviada. La ocupación de los caballos, que se mandó suspender por auto de 22 del mismo mes de Noviembre, no ha sido justificada por la autoridad ejecutora, y es de concederse por esta causa el amparo definitivo, igualmente que contra el allanamiento que se ha hecho referencia, á fin de que vuelvan las cosas al estado que tenían antes de la violación.

Conforme á las prescripciones constitucionales, la propiedad particular no puede ser ocupada sin consentimiento de su dueño, á no ser por causa de utilidad pública, y previa indemnización; y tampoco se puede molestar al individuo en su domicilio y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ninguna de estas prescripciones han sido observadas debidamente por los ejecutores de los actos reclamados, segun se advierte sin esfuerzo de los informes que produjeron. Los hechos están manifiestos y sería difuso enumerarlos de nuevo, siendo evidente la violación que constituye.

Fundado en estas razones y en todas las expuestas, tanto en este como en el anterior parecer fiscal, el que lleva la voz, concluye pidiendo al Juzgado se sirva declarar,

que el amparo solicitado por el C. Evaristo Madero, solamente procede respecto del allanamiento de su domicilio y de la ocupación de los caballos que sean de su propiedad.

Saltillo, 10 de Diciembre de 1873.—*Is-
teban Horeacitas.*

Es copia del original que certifico. Saltillo, 4 de Marzo de 1874. Damos fé:—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—A.—*Bernardo Laredo.*—A.—*Antonio D. Treviño.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Saltillo, 2 de Marzo de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por D. Evaristo Madero, contra los CC. General Andres S. Viesca y Coronel Emiliano Laing, con motivo de haber violado en su persona, el primero, las garantías consignadas en el artículo 27 de la Constitución general de la República, exigiéndole préstamos forzosos y ocupándole caballos de su propiedad sin su consentimiento; y el segundo, la que le otorga el artículo 16, allanando su domicilio, la fábrica de hilados de su propiedad, en la cual fueron aprehendidos varios de sus operarios sin los requisitos y condiciones que establece el citado artículo; el auto fecha 18 de Noviembre en que el Juzgado, de conformidad con el artículo 59 de la ley de 20 de Enero de 1869, pidió informe sobre los actos reclamados; así como el parecer fiscal producido por el C. Promotor, relativo á que se decretó la suspensión de los actos reclamados, en la parte tan solo que tiene conexión con la ocupación de los caballos que justifique el Sr. Madero ser de su propiedad; el auto fecha 22 de Noviembre en que de conformidad con el pedimento fiscal se decretó la suspensión de los actos referidos en los términos fijados por el C. Promotor, no obstante las razones expuestas por aquellos en sus respectivos informes; las comunicaciones que con fecha 3 de Diciembre, dirigieron á este Juzgado los CC. Viesca y Laing, contestando la nota en que se les

pidió en forme con justificación, y en las cuales suplican, se sirva prorogarles el término fijado para rendirlo, y manifestando además, ser inexactos como lo tienen dicho, los conceptos estampados por el Sr. Madero sobre habérselo exigido préstamos forzosos y haber obrado arbitrariamente en todos los demás hechos que les atribuyen; supuesto que se hallaban investidos de las facultades que por el Gobierno interino, de acuerdo con las prescripciones del decreto número 172 de la Honorable Legislatura del Estado, les habían sido delegadas; el pedimento que el C. Promotor extendió de conformidad con el artículo 99 de la expresada ley de amparo, solicitando que el Juzgado declare: que el amparo promovido por Madero procede legalmente del allanamiento de su domicilio y de la ocupación de los caballos que sean de su propiedad; las pruebas aducidas por el quejoso, y todo lo demás que de autos consta, debió tenerse presente y ver convino.

Considerando: que por las pruebas presentadas por el promovente aparecen plenamente justificados los hechos siguientes: primero: el allanamiento del domicilio y fábrica de hilados pertenecientes al quejoso, verificado por orden del C. Coronel Emiliano Laing. Segundo: la ocupación de la propiedad de este por orden del General Andres S. Viesca, salvándose en ambos casos las formalidades que señalan los artículos 16 y 27 de la Constitución general, como requisito previo e indispensable á la violación del sagrado de la familia y á la ocupación de la propiedad.

Que aunque el C. Madero en su ocurno de amparo se extiende á solicitarlo por los operarios de la fábrica que fueron cogidos en ella por la fuerza que verificó el allanamiento referido, esta solicitud no se ha tomado en consideración, en virtud de lo dispuesto terminantemente en el artículo 29 de la ley de 20 de Enero de 1869, ya referida, que previene: *que los juicios de amparo se sigan á peticion de la parte agraviada.*

Que aunque en el presente juicio, y con

TOMO V.—PARTE II.

relación al allanamiento del domicilio del Sr. Madero, no debiera concederse el amparo que solicita, supuesto, *que el efecto de una sentencia que concede amparo es que las cosas se restituyan al estado que guardaban antes de violarse la Constitución* (artículo 23), no debe ser así, en vista de la Suprema ejecutoria fecha 3 de Enero del corriente año, en que se expresa de una manera clara y terminante: *que si bien el objeto principal del juicio de amparo, es que las cosas vuelvan á su estado anterior, no es sin embargo el único, ni tal vez el mas importante en muchos casos, en los cuales se busca por medio del amparo, mas que la cesación material del agravio, la reparación moral de una declaración solemne y autorizada de que se ha cometido un atentado.*

Que no obstante que las autoridades ejecutoras de los actos reclamados en los informes que rindieron con fecha 20 de Noviembre, desde el punto llamado "La vaquería" manifiestan, ser un hecho que el Estado se halla envuelto en una contienda civil y sobre las armas, patentizando esta circunstancia, la imposibilidad de obrar como en tiempo de paz y tranquilidad en que todo marcha encarriladamente; estas razones, en nada destruyen la fuerza y vigor del artículo 128 del Código fundamental, que dice terminantemente: *Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aunque por alguna rebelion se interrumpa su observancia.*

Con fundamento pues, en las anteriores consideraciones y en los artículos 16, 27 y 101 de la Constitución general de la República, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Evaristo Madero, contra los actos ordenados por los CC. General Andres S. Viesca y Coronel Emiliano Laing, en cuya virtud fué allanado su domicilio y ocupada su propiedad.

Hágase saber; sáquense copias de esta sentencia para su publicación en el Órgano Oficial del Estado y Semanario Judicial de la Federación, y remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado. Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.—A.—Bernardo Laredo.—A.—Antonio D. Treviño.*

Es copia que certifico. Saltillo, Marzo 8 de 1874. Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.—A.—Bernardo Laredo.—A.—Antonio D. Treviño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 20 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Coahuila por D. Evaristo Madero contra los CC. General Andrés S. Viesca y Coronel Emiliano Laing, fundando su queja en la violacion de los artículos 16 y 27 de la Constitucion federal; vistos los informes de los Gefes responsables; el parecer fiscal; el fallo del inferior; y

Considerando: que está probado por las constancias de autos, el acto capital de donde independientemente de otra consideracion, debe originarse la concesion del amparo, y es la violacion de una de las garantías del hombre consignadas en la Constitucion federal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del C. Juez de Distrito que ampara y protege á D. Evaristo Madero contra los actos de los CC. General Andrés S. Viesca y Coronel Emiliano Laing, que importan una infraccion de los artículos 16 y 27 de la Carta fundamental.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—J. Jose de la Garza.—*

Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 7 de 1874.—*Emilio Ordaz, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla por los CC. Rafael Perez y otros, contra el Gef. Político de Huejotzingo, que les exige la contribucion de Guardia Nacional.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Siendo el asunto que se trata en estos autos absolutamente el mismo que el que se trató en el juicio promovido por Jesus Flores y Miguel Zayas, contra el Gef. Político de esta Capital, que los redujo á prision por estar debiendo la pension de guardia nacional; y que la Corte Suprema de Justicia lo falló el 20 de Febrero del año próximo pasado, decretando que amparaba y protegía á los quejosos, el promotor reproduce ese muy respetable fallo en el presente juicio, y en virtud de los sólidos fundamentos en que descansa, pide á V., se sirva amparar á los promoventes, por estar violadas en sus personas las garantías constitucionales de que hacen mérito en su escrito de queja, supuesto que es un hecho que se les cobra la contribucion de guardia nacional por el alcalde de su pueblo, cuando ni éste, ni el gobierno del Estado tienen facultades para ello.

Sírvase V., C. Juez, así declararlo por ser de justicia.

Zaragoza, Febrero 12 de 1874.—*E. Sanchez.*